

Salud Pública

¿Cómo está la transparencia y rendición de cuentas en la región?

DIÁLOGOS
CONNECTAS
ENCUENTROS QUE TRANSFORMAN LAS AMÉRICAS



Introducción

Motivados por la emergencia de la covid-19, los gobiernos de la región corrieron a realizar compras de equipos e insumos médicos, multimillonarias negociaciones con farmacéuticas para lograr vacunaciones masivas y contrataciones express para atender la pandemia. Esta situación favoreció la opacidad en las compras públicas en varios países de la región.

Esto vino a su vez con un buen número de escándalos de detrimentos patrimoniales, compras injustificadas, contratistas fantasma y abusos de diversa índole en medio de la emergencia. En México, Perú, Colombia y Uruguay, según Red Palta, hubo sobrepuestos en las mascarillas N95 que compraron los gobiernos.

Sumado a esto, durante la compra de insumos médicos se evidenció la falta de transparencia en los procesos de contratación en la región. Asimismo, los rezagos en infraestructura quedaron en evidencia, como lo reveló la alianza de Acento y CONNECTAS en Los hospitales enfermos en República Dominicana.

A causa de la pandemia, en América Latina se presentó un retroceso en los procesos de contrataciones y de transparencia; le permitió al gobierno tener una “excelente excusa” para negar información que por ley es pública, modificar la leyes de transparencia y los tiempos de entrega de la información, y abrir una puerta que pone en peligro la rendición de cuentas.

Para entender cómo está la transparencia y la rendición de cuentas en la región, CONNECTAS organizó un panel con expertos en el tema que explicaron cómo la opacidad ha crecido con la pandemia. Algunas de las preguntas que se discutieron fueron ¿cuáles son las barreras impuestas para los periodistas en la búsqueda de esta información? ¿Cuáles son las principales barreras al acceso a la información que aún persisten finalizada la emergencia sanitaria? ¿Cuáles están siendo las consecuencias de la escasa disponibilidad de datos abiertos en la región?

En este diálogo participó Alejandra Bauer, coordinadora del sector público en Poder Ciudadano de Argentina; Claudia Ocaranza, periodista mexicana Miembro de #CONNECTASHub y Guillermo Burr, gerente senior de Programas para América Latina en Open Contracting.

Este evento se realizó en alianza con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el Border Center for Journalists, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y CONNECTAS.

Panelistas



Alejandra Bauer - Argentina

Abogada (Universidad de Buenos Aires), diplomada en Gestión y Control de Políticas Públicas y maestranda en Antropología Social y Política (FLACSO). Trabajó en áreas de Derechos Humanos y políticas de Transparencia y Fortalecimiento Institucional tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en el Congreso de la Nación. Actualmente se desempeña como coordinadora de sector público del área de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano.



Guillermo Burr - Chile

Gerente Senior de Programas para América Latina en Open Contracting. Fue jefe de investigación e inteligencia de Negocios en la agencia central de compras de Chile, ChileCompra. Asimismo, hizo parte del equipo de revisores de la OCDE para los sistemas de contratación de Colombia y México. Tiene un título de Sociología de la Universidad de Chile, un Master en Políticas Públicas de la UDD y Diplomas de Inteligencia de Negocios y Comportamiento del Consumidor en la UAI y de Defensa y Seguridad Interior del Ministerio de Defensa de Chile.



Claudia Ocaranza - México

Miembro de #CONNECTASHub, periodista de investigación y datos, con experiencia en periodismo financiero y periodismo de investigación sobre empresas y derechos humanos. Ha trabajado en medios, fundaciones y proyectos independientes con distintas temáticas. Desde cambio climático, género, finanzas, emprendedores y rendición de cuentas empresarial. Trabajó en el especial Salud, Dinero y Corrupción realizado por PODER, donde revelaron sobrecostos a medicamentos en México, entre otros descubrimientos. Estudió Periodismo y Medios de Información en el Tecnológico de Monterrey y la maestría en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización en la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Becaria de la Fundación Carolina.

Altos costos de vida

La emergencia sanitaria por la covid-19 generó que varios gobiernos en la región modificaran los tiempos en sus leyes de transparencia y acceso a la información. Esta situación permitió la opacidad en las compras públicas, que se declarara información reservada o confidencial -sin cumplir con lo dispuesto en las normas- y acordar acuerdos de confidencialidad y reserva, como ocurrió con la compras de vacunas.

Así como los gobiernos no estaban preparados para afrontar esta crisis, las leyes no contemplaron la ruta o las alternativas para cumplir con lo estipulado. Este vacío ocasionó un detrimento en la rendición de cuentas de los dineros gastados por los gobiernos para atender la crisis sanitaria.

Desde Open Contracting identificaron que la emergencia de la covid-19 se usó como excusa en la región para imponer barreras al acceso de la información en temas de salud pública. Guillermo Burr señala que "las barreras de acceso se han extendido sin indicar claramente durante cuánto tiempo o bajo qué condiciones precisas se terminaría con ellas; en otros se han

extendido los plazos (como en el caso de México); en otros la falta de transparencia sobre la compra de medicamentos (...) esto pone en peligro transparentar lo que se compró durante la emergencia".

En México la investigación realizada por la Red Palta permitió identificar el retroceso que la emergencia sanitaria propició en el acceso a la información. Claudia Ocaranza señaló que "en México es posible que todo sea reservado, o confidencial. También, los funcionarios se justifican diciendo que por la emergencia sanitaria no tienen capacidad para responder a una solicitud de información".

En el documento Contrataciones públicas en estados de emergencia realizado por la fuerza conjunta de los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina, sugiere que cuando terminen los estados de emergencia los gobiernos deben informar el total de los recursos invertidos. Y aunque hay un imaginario colectivo de que la pandemia desapareció, esta sigue siendo la excusa preferida por los gobiernos para imponer barreras al acceso de la información de salud pública.



"Estas barreras dan cuenta de una actitud de minimizar la relevancia de la información y el interés que la sociedad puede tener sobre esta información".

Alejandra Bauer

Confianza ciudadana afectada

El informe *Pandemia, Anticorrupción y oportunidades para América Latina*, publicado por la Red Anticorrupción Latinoamericana, semana que el gobierno y sociedad civil han enfrentado una escasa disponibilidad de datos abiertos relevantes para reaccionar a la emergencia.

La falta de acceso a información y transparencia está socavando aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la región. Para Guillermo estas afectaciones a la confianza son producto de la escasa disponibilidad de datos abiertos sobre temas cruciales. El panelista señala que esto se puede evitar si los gobiernos operan desde el principio sobre la base de la apertura y la transparencia.

“Cuando esos contratos se negocian bajo el escenario de que la información se divulgará, generalmente se negocian mejor; se negocian teniendo en cuenta el interés público y la rendición de cuentas, lo que fortalece la percepción o la confianza que tienen los ciudadanos en la autoridad. Cuando la información no sale a la luz pública de forma oficial y bajo secretismos, genera más desconfianza”, explica Guillermo.

Para propiciar un cambio en el actuar del gobierno, el periodismo y la ciudadanía pueden empujar los procesos de transparencia en sus países y las buenas prácticas de contratación. Los panelista coincidieron en que hay que aprovechar la experiencia que se vivió con la pandemia y motivar a los gobiernos a generar protocolos sobre cómo actuar y transparentar la información en medio de una emergencia, pues esto no estaba claro ni estipulado. “Tener un protocolo de transparencia activa que permita a los periodistas y organizaciones de la sociedad civil tener una base con que medir lo que está pasando en eventos catastróficos”, señala Claudia.

Además, en el sector público hay una creencia de que un gobierno abierto es un obstáculo. Alejandra propone que para cambiar este pensamiento se debe vender mejor la ley a los funcionarios y líderes en la región y robustecer las políticas de transparencia. En últimas, estas leyes además de servir como un mecanismo de rendición de cuentas, son la puerta para que la ciudadanía legitime la gestión y las decisiones del gobierno y construya consensos sobre temas claves.



“La ciudadanía tiene la legítima duda de por qué se están ocultando las contrataciones. Las contrataciones abiertas permiten que la ciudadanía conozca y crean en los programas de inmunización en la pandemia”

Guillermo Burr

Prácticas indebidas de contratación

Durante los estados de emergencia se han ido denunciando los sobrecostos en productos para atender la covid-19, las contrataciones a dedo cuestionables y toda suerte de gabelas tributarias que le otorgaron a las farmacéuticas (modificación de leyes para dar indemnidad, eliminación de impuestos, secretismo y comprar bajo condiciones cuestionables).

Las compras de insumos y de vacunas permitieron identificar que las fallas en los procesos de contratación en el sistema de salud pública no era nuevas. Alejandra explica que, al comparar las compras de vacunas covid con las del calendario regular (fuera de la emergencia) encontraron que los procesos no están estandarizados, lo que permite la corrupción y la competencia desleal.

En México un caso muy famoso y conocido fue el del proceso de compra de las vacunas CanSino contra la covid-19. Una investigación expuso cómo el gobierno contrató a una empresa intermediaria, cuyo presidente había sido multado en años anteriores por corrupción y falta de competencia, para adquirir 35 millones de vacunas.

Por su parte en Argentina, la mala gestión de la información en salud pública ocasionó una falla en la trazabilidad de las vacunas, desde el momento en que llegaron al territorio nacional hasta que fueron despachados a las regiones. Alejandra explica que esto se debe a la mala o ineficaz aplicación de la ley vigente de acceso a la información pública por parte de los funcionarios.



“No es que se inventaron esquemas nuevos. Ya existían esos esquemas. En pandemia se usaron de una forma mucho más velada porque se lo permitieron los cambios en las reglas de transparencia”

Claudia Ocaranza



2022

www.connectas.org



facebook.com/connectas



twitter.com/connectasorg